

# **BOLETIN DE NOTICIAS**

## **COMITÉ MONS. OSCAR ROMERO DE MADRID**

**Argumosa, 1-6º-B 28012-Madrid. Tfno.: 91.539.87.59 Email:cmromero@nodo50.org**

El Comité Mons. Oscar Romero de Madrid no se responsabiliza necesariamente de las opiniones presentadas en este Boletín. Señalamos las fuentes de donde han sido extraídas.

En caso de que no desee seguir recibiendo nuestro Boletín, por favor, comuníquenoslo por medio de un correo electrónico a la dirección más arriba señalada.

**BOLETÍN NÚMERO 244**

**FECHA: 27 de Junio de 2016**

### **SUMARIO**

<b>PAÍS</b>	<b>CONTENIDO</b>	<b>NºPG.</b>
<b>BOLIVIA</b>	<b>AUGE Y CAÍDA DEL "VIVIR BIEN"</b>	<b>2</b>
<b>BRASIL</b>	<b>BRASIL Y LA CORRUPCIÓN OLIGÁRQUICA</b>	<b>5</b>
<b>COLOMBIA</b>	<b>"SE ACABÓ LA GUERRA, OJALÁ QUE NUNCA VUELVA"</b>	<b>6</b>
	<b>"EL PUNTO CENTRAL PARA EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO TENDRÁ QUE VER CON LO QUE PASE EN EL CAMPO COLOMBIANO"</b>	<b>10</b>
<b>HONDURAS</b>	<b>LA MACCHI: MUCHA HOJA Y Poca CARNE</b>	<b>12</b>
<b>MÉXICO</b>	<b>DESDE LA TEMPESTAD</b>	<b>14</b>
<b>NICARAGUA</b>	<b>CRISIS INSTITUCIONAL ASOMA EN PANORAMA ELECTORAL DE NICARAGUA</b>	<b>15</b>
<b>PANAMÁ</b>	<b>EL CANAL DE PANAMÁ SIN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL</b>	<b>17</b>
<b>VENEZUELA</b>	<b>UNASUR SUSPENDE REUNIÓN DE CANCELLERES SOBRE VENEZUELA</b>	<b>18</b>
	<b>CARTA DE PEPE MUJICA A LUIS ALMAGRO, SECRETARIO DE LA OEA</b>	<b>19</b>

## BOLIVIA

### **AUGE Y CAÍDA DEL “VIVIR BIEN”**

Sin haber pasado por escrutinios sistemáticos y una validación empírica, el “Vivir Bien” capturó la atención de movimientos indigenistas, ambientalistas, ONG, académicos, políticos y hasta de funcionarios públicos encargados de formular políticas y planes de desarrollo. Ganó inmediata atención global al cuestionar la modernidad occidental, su expresión neoliberal y tecnocrática y, sobre todo, la incapacidad de la corriente dominante —el ‘desarrollo sostenible’— para superar la crisis ambiental ocasionada por el desarrollismo reinante. Es una de esas raras ocasiones en que las ideas producidas en América Latina ganan la atención del mundo desarrollado.

Más que una teoría o modelo “alternativo al desarrollo”, el Vivir Bien (Buen Vivir en Ecuador) está más cerca de ser un nuevo enfoque para la problematización de la interdependencia entre sociedad y (medio) ambiente. Es un marco general que ofrece una perspectiva renovada para reformular esa mirada antropocéntrica que antepone los intereses del hombre a la integridad ecológica. Sin embargo, esta propuesta no ha podido avanzar más allá de la crítica ante las formas más perversas del capitalismo. No se ha traducido en nuevos métodos, áreas de trabajo, estándares o prácticas ambientales. El apogeo apresurado del Vivir Bien no se pudo sostener por mucho tiempo debido a las evidentes limitaciones en su elaboración teórica y la cooptación política por parte del gobierno para la legitimación de las viejas prácticas extractivistas.

En este breve texto vamos a examinar el auge y la caída del Vivir Bien, prestando particular atención a los aportes producidos para desafiar la postura conservadora de los proponentes del ‘desarrollo sostenible’.

#### **1. Llegada explosiva del Vivir Bien**

El Vivir Bien emerge en un contexto y periodo particular en el que convergen movimientos indígenas originarios, campesinos, políticas neoliberales y crisis ambiental de alcance global. El ascenso de Evo Morales al gobierno en 2006 abrió un espacio público politizado y propicio para la discusión de cómo la población subalterna podría contribuir a la transición hacia la descolonización y el posneoliberalismo o, en su versión radical, hacia un nuevo paradigma alternativo al desarrollo, al capitalismo y a la modernidad occidental. En algunos círculos políticos e intelectuales hervía tal convicción, se creía que en Bolivia estábamos a punto de descubrir el ansiado camino alternativo para la humanidad. Una de las expresiones concretas de esta euforia es el ciclo de conferencias “Pensando el mundo desde Bolivia” impulsado por la Vicepresidencia. Se extendió por varios años con la llegada de intelectuales de izquierda de talla mundial para abrir espacios de reflexión sobre el devenir de la sociedad desde una “ubicación epistemológica” que “invierte la aplicación de modelos, políticas y prototipos de producción de conocimiento impuestos desde el exterior”.

El proyecto de pensar el mundo requería de un sustento original, de un “saber indígena” cuya búsqueda habría de desembocar en la adopción política, legal y discursiva del Vivir Bien. Los orígenes de este término se remontan al menos hasta los años noventa cuando aparecieron los primeros esfuerzos sistemáticos de conceptualización de *Suma Qamaña*. Simón Yampara, uno de los pioneros aymaras en este campo, lo definía como “vivir bien en armonía con los otros miembros de la naturaleza y con uno mismo”. Sostuvo que la concepción de los pueblos amerindios no sólo estaría limitada al crecimiento material sino al bienestar con crecimiento biológico de los “mundos vegetal, animal, lítico y territorial”. En los años posteriores muchos otros popularizaron el Vivir Bien, especialmente durante la Asamblea Constituyente (2007-2009). David Choquehuanca fue el principal impulsor de su adopción dentro del gobierno. Una vez que las explicaciones castellanizadas cobraron fuerza, indígenas e indigenistas se lanzaron a la identificación de su equivalente en otros idiomas precoloniales. La nueva Constitución Política del Estado de 2009 recoge estos esfuerzos al reconocer como principios ético-morales el *Suma Qamaña* (vivir bien), *Ñandereko* (vida armoniosa), *Teko Kavi* (vida buena), *Ivi Maraëi* (tierra sin mal) y *Qhapaj Ñan* (camino o vida noble).

El Vivir Bien adquiere sentido porque el eje central de reflexión gira en torno a la interdependencia entre la sociedad y el entorno natural y la necesaria armonización bajo principios de reciprocidad. Esto implica una ruptura fundamental con la ideología occidental de dicotomía entre sociedad y

naturaleza, donde esta última simplemente es suministradora de bienes materiales a la sociedad y está al servicio de los humanos. El Vivir Bien modifica esta tesis al sostener que la naturaleza no es simplemente algo que rodea a la sociedad sino que la humanidad es parte integral del entorno. Este es uno de los argumentos más fuertes en contra de la 'economía verde' o los 'servicios ambientales' creados para fijar precios y tranzar procesos y productos de la naturaleza, tales como la purificación del agua y aire, generación de nutrientes del suelo, polinización, provisión de insumos y otros. El Vivir Bien al reformular la relación entre los seres humanos y todos los seres vivos y no vivos se opone a la mercantilización de la naturaleza. La introducción del otro concepto andino, *Pachamama* o "Madre Tierra", reforzó estos planteamientos.

A nivel global, la conferencia Río+20 sobre desarrollo sostenible ha sido el momento cumbre para el protagonismo boliviano con su propuesta de Vivir Bien y en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. La propuesta boliviana de que se reconozca a la Madre Tierra como sujeto de derechos fue presentada en alianza con Ecuador y con apoyo de los países del ALBA y el Grupo 77+China. Sin embargo, la declaración final titulada "El futuro que queremos" no representa avance significativo alguno hacia una reforma o transformación paradigmática. La propuesta quedó relegada por los países que controlan estos espacios de poder global a la categoría de una anotación marginal aunque el gobierno boliviano tiene otra conclusión al señalar que "se ha logrado incluir los conceptos de "Madre Tierra" y "Derechos de la naturaleza" como expresiones que son usadas en varios países en el mundo para referirse a la naturaleza y sus derechos".

El Vivir Bien adquirió un innegable reconocimiento internacional por su carácter cuestionador y transformador, razón por la que no puede ser utilizado de forma consistente para justificar prácticas ambientales suaves. Pero en la esfera política la explotación instrumental de este enfoque ha sido cotidiana no solo para exhibir supuestas prácticas verdes sino para disfrazar políticas agresivas de sobreexplotación de recursos naturales. Un ejemplo es la Ley 337 de 2013 que, invocando la implementación de la ley Marco de la Madre Tierra de 2012, legaliza la destrucción de bosques y la ampliación de la frontera agrícola para expandir el agronegocio. Otra muestra es el Decreto Supremo 2366 de 2015 que relativiza las medidas de protección de las áreas protegidas y allana el camino para actividades hidrocarburíferas en zonas de alta sensibilidad ecológica y hábitat de pueblos indígenas. Al igual que en otros casos, se alega que estas normas están destinadas a cumplir el mandato de defensa de la Madre Tierra.

## 2. El declive

Después de una inusitada preeminencia, el Vivir Bien ha comenzado a cosechar cuestionamientos desde distintos frentes. Las razones son varias pero identificables. Una muy evidente es que aunque promete una abierta ruptura con los esquemas eurocéntricos y coloniales, en realidad su última innovación conceptual sobre la Madre Tierra como sujeto de derecho, está asociada a la corriente internacional de ecología radical o profunda (*Deep Ecology*), esto es, a movimientos conservacionistas europeos para quienes los derechos de la naturaleza incluso se sobreponen a los intereses de los seres humanos. Algunos críticos de esta supuesta alianza "natural" de intereses entre indígenas y conservacionistas califican la misma como inestable y conflictiva "puesto que la suprema aspiración indígena suele ser el control del territorio, incluyendo la capacidad de decisión sobre el uso de todos sus recursos naturales, mientras que el objetivo de las organizaciones ambientalistas internacionales suele consistir en imponer [...] un "conservacionismo de museo", incompatible con las necesidades de subsistencia de la población local". Esto implica que el Vivir Bien ha dejado de ser un movimiento descolonizador y expresión propia de los pueblos indígenas.

La segunda razón del declive es su creciente popularidad pero sin referencias de contextualización ni evidencias empíricas sobre su existencia histórica. El término Vivir Bien aparece siete escasas veces en la Constitución de 2009 –algo que contrasta con 27 referencias al 'desarrollo sustentable'– mientras que las palabras Madre Tierra y *Pachamama* solo se mencionan en el preámbulo. Sin embargo, el reciente "Plan de desarrollo económico y social 2016-2020" nombra más de ochenta veces el término en cuestión y además contiene una sección de más de tres páginas para explicar de forma ampulosa el Vivir Bien como "horizonte civilizatorio y cultural alternativo al capitalismo y a la modernidad que nace en las cosmovisiones de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas". Estos textos oficiales y muchos

otros trabajos de divulgación no solo popularizan más su uso sino acaban presentando una versión idealizada e imposible de rastrear en el tiempo y espacio. Alison Spedding hace notar que las exigencias de sustentos empíricos a menudo son rebatidas descalificando por su historia de vida y origen social a los que se hacen preguntas difíciles. En esta mirada, los ataques personales se emplazan en primer plano a modo de barreras que interceptan a quienes intenten acercarse al pasado histórico o al territorio remoto del Vivir Bien. La validez histórica de la noción de la *Pachamama* es menos dudosa pero su recreación a mayor escala es un imposible ante la creciente expansión de la economía globalizada y el rol subordinado de nuestra economía.

Por último, el Vivir Bien está sufriendo un desgaste acelerado al no haberse operativizado en nuevos estándares de desarrollo, políticas sectoriales y prácticas ambientales. El Plan de desarrollo económico y social 2016-2020 incluye un apartado completo sobre “soberanía ambiental y desarrollo integral” para implementar una “nueva visión ambiental” y de “gestión de los sistemas de vida de la Madre Tierra”. Pero los indicadores propuestos, algunos bastante ambiguos, más bien caen dentro de la línea conservadora del ‘desarrollo sostenible’, es decir, procurar hacer algo pero sin perturbar el *statu quo* del modelo de desarrollo dominante. El tono cuestionador con que el gobierno se presenta en escenarios internacionales no está acompañado por mejoras significativas, por ejemplo, en el índice de desempeño ambiental (EPI por su sigla en inglés). Según el último reporte (2016), Bolivia se ubica en el puesto 76 de 178 países y está por debajo de la media entre los países de la región. Es una posición que casi no varía a lo largo del tiempo porque si bien por un lado los indicadores sociales (acceso al agua, servicios de salud, saneamiento básico y otros) mejoraron de forma significativa, por otro lado los costos ambientales son cada vez más altos, siendo por tanto mediocre el desempeño boliviano en el cuidado de la vitalidad ambiental, de los ecosistemas y recursos productivos. Todo esto se traduce en una brecha cada vez más profunda entre el discurso y la práctica ambiental y acaba diluyendo cualquier contenido revolucionario.

### **3. Conclusión**

Los aprietos en los que ha caído el Vivir Bien no son menores e influirán de forma decisiva en las futuras discusiones y prácticas ambientales. Es un retroceso en términos de discusión intelectual y política porque la propuesta de Vivir Bien emergió como una reacción legítima, necesaria y ‘desde abajo’ ante los estragos ambientales y sociales provocados por el paradigma de desarrollo sin fin. Al enfatizar en la necesidad de armonización de los intereses de la sociedad con los derechos de la Madre Tierra, esta propuesta se sumó a otras voces de otras partes del mundo y de esa manera contribuyó a rebatir la dicotomía occidental entre la sociedad y la naturaleza. Obtuvo una amplia repercusión internacional no solo en los ámbitos políticos sino también entre académicos, activistas y movimientos internacionales.

No sería erróneo concluir que los aportes intelectuales más recientes para el desarrollo conceptual del Vivir Bien han sido influenciados fuertemente por conservacionistas y ambientalistas radicales de países desarrollados, es decir de quienes incluso llegan a sostener que cualquier forma de explotación de recursos es incompatible con los derechos de la naturaleza. A medida que la discusión se tornó más abstracta, idealizada y nuevas terminologías fueron adoptadas, los indígenas, sus prácticas y su filosofía de reciprocidad y armonía pasaron a ser meras referencias y tradiciones del pasado útiles para concebir el Vivir Bien como paradigma de horizonte civilizatorio y alternativo al capitalismo. Uno de los problemas con estos giros recientes es la ausencia de un anclaje contextual, lo que conlleva un doble efecto: mientras el Vivir Bien adolece de utilidad práctica al no poder operativizarse a nivel de comunidades y municipios indígena originario campesinos, en la esfera política tiene un abundante uso retórico y decorativo.

Por último, la retórica política ha reemplazado la discusión de cuestiones propiamente ambientales. La apropiación discursiva de las preocupaciones de la gente por los problemas ecológicos es una de las expresiones políticas contemporáneas más llamativas. El gobierno de Evo Morales ha construido poder apelando a la población de origen indígena originario campesina, al electorado sensible al agravamiento de la crisis ambiental, a las personas con convicciones anticapitalistas, a quienes aspiran a fundar el posneoliberalismo y en general a grupos mayoritarios sin privilegios económicos y políticos. Dado que la apropiación discursiva del Vivir Bien es inofensiva para la economía rentista, el gobierno también ha tenido la habilidad de responder a las demandas de crecimiento económico.

Entonces, en alguna medida estamos frente a un 'populismo ambientalista' que sustenta su llamado político en la denuncia constante de los males económicos y ambientales provocados tanto por los poderes externos como los nacionales. El mayor problema es que esta forma de cooptación del Vivir Bien inhibe cualquier discusión reflexiva y política a profundidad sobre el potencial transformador del Vivir Bien y sus posibles aplicaciones específicas.

**Gonzalo Colque - Rebelión**

## **BRASIL**

### **BRASIL Y LA CORRUPCIÓN OLIGÁRQUICA**

La corrupción acompaña a la mayoría de los miembros de la Cámara Baja, del Senado y del gobierno provisional brasileño después que la oligarquía criolla logró con artimañas sacar a la legítima presidenta Dilma Rousseff.

El dinero mal habido ha salpicado a los hasta hace pocos meses denominados intocables, debido al control y el poder que ejercen en esa inmensa nación sudamericana.

Todo estaba preparado desde hacía meses para lanzar el golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil, Dilma Rousseff con el objetivo de devolverle el país a la fuerte burguesía criolla, eliminar los programas sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar el sistema neoliberal que ignora los beneficios para las grandes mayorías.

Consumada la implementación del impeachment (Juicio Político) en la Cámara de Diputados que lo aprobó por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo al Senado y, al sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su cargo por seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta.

Resulta completamente incongruente que de los 21 senadores de la comisión especial que determinó que Dilma debía ir a juicio político, ocho de ellos aparecen implicados en el caso de corrupción de Petrobrás. Ellos son: Antonio Anastasia, Donald Caiado, Dario Berger, Gladson Cameli, Fernando Becerra, Aloysio Nunes, Cassio Cunha y Zeze Perrilla.

A estos se sumaron después numerosos senadores y congresistas implicados en actos de corrupción con el manifiesto objetivo de que fuera enterrado el caso Lava Jato (lavadero de autos) por desfalcos y malversaciones a la empresa estatal Petrobrás.

En 2014 se hizo pública la investigación que destapó la red de corrupción en la estatal Petrobrás, además de numerosos problemas financieros en la empresa.

La operación consistía en que compañías sobornaban a altos dirigentes de Petrobrás y a otros funcionarios públicos para conseguir contratos multimillonarios con la mencionada petrolera. Decenas de ejecutivos de varias empresas han sido detenidos.

Muchos de los poderosos políticos implicados han tratado de detener las investigaciones sobre Petrobrás para que el lodo no siga convirtiéndose en arenas movedizas.

En manos del juez del Tribunal Supremo Federal están cuatro de los hasta ahora "intocables": el ex presidente del Senado, Renan Calheiros, el senador y ex ministro, Romero Jucá, el ex presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el ex presidente de Brasil José Sarney, todos bajo acusación de obstruir las investigaciones sobre Petrobrás y de conspirar contra la operación.

Dos aspectos importantes al que aspiran la oligarquía criolla y los políticos de derecha son lograr la privatización de Petrobras (para enriquecerse aún más) y eliminar los grandes logros sociales alcanzados durante los gobiernos sucesivos de Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Pero podríamos preguntarnos cómo una administración, con un poder ejecutivo y legislativo, lleno de personas con antecedentes y actuales procesos por corrupción, puedan mantenerse en el poder sin que organizaciones financieras internacionales, gobiernos de países desarrollados y medios de comunicación occidentales, no lo hayan condenado ni solicitado sanciones.

Los datos son contundentes: Según la ONG Anticorrupción Transparencia Brasil, de los 594 miembros de las dos cámaras, el 59 % registra cargos y condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.

De los 513 congresistas, 303 tienen procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la justicia y tribunales de cuentas.

Ya son tres los ministros del presidente por “sustitución forzada” Michel Temer que han caído a solo un mes de la salida de Dilma: de Transparencia, Fabiano Silveira; de Planificación, Romero Jucá y de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Los tres presionaban y trataban de chantajear a jueces y políticos para que no continuaran las investigaciones de corrupción en la empresa petrolera.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue suspendido del cargo al ser acusado por varios delitos como mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos y otra por 20 millones en bancos uruguayos, malversación de 5,7 millones de dólares y otros más. Cunha amenazó con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos Temer si es condenado. Si se determina mi prisión por el Supremo Tribunal Federal, no caerá solo, dijo Cunha y le recordó al presidente provisional que sin su apoyo ningún gobierno logrará apoyar ningún proyecto.

Temer no se queda atrás y negocia un acuerdo general con la Justicia pues está acusado de hacer una donación en 2012 de 428 000 dólares de origen irregular para la campaña electoral de Gabriel Chalita, candidato del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a la alcaldía de Sao Paulo; un cargo por apadrinar una venta ilícita de etanol a finales de los años 90; otra demanda por ser beneficiado con la entrega de 1 230 000 dólares por un constructor.

Temer y todo su aparato oligárquico se han lanzado a tratar de eliminar, lo antes posible, las acciones sociales que emprendieron los gobiernos de Lula y Dilma a favor del pueblo. En esa línea, presionan para recortar los presupuestos para la salud y educación; eliminar empleos en el sector público; elevar las jubilaciones a 65 años de edad; privatizar numerosas empresas estatales, entre ellas Petrobrás; suspender el programa Mi Casa, Mi Vida, y cancelar la construcción de 11 200 viviendas pactadas por la administración anterior.

Durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores se generaron casi 6 000 000 de puestos de trabajo que elevaron el poder adquisitivo de los brasileños. El proyecto Mi Casa, Mi Vida fabricó más de un millón de inmuebles y esperaba llegar a 2016 con 2,75 millones en total.

La pobreza bajo del 26 % en 2002 a 8,7 % en 2015. El presupuesto para la educación en 2015 alcanzó el 15,57 % del presupuesto nacional, mientras en la salud se amplió la cobertura médica al 85 % de la población menos favorecida. Desde hace 12 años, el programa Bolsa Familia ha brindado apoyo a 53 millones de familias pobres y a 17 millones de niños en edad escolar.

Dilma no está acusada por corrupción, sino por "haber irrespetado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita enormemente los gastos del Estado para los proyectos sociales, pero en contraposición, permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".

En resumen, es el llamado golpe de Estado blando en el que un presidente, elegido democráticamente con respaldo de 54 millones de votos, ha sido objetado por autoproclamados “jueces” parlamentarios, muchos de ellos imputados por corrupción, desfalco y lavado de dinero.

**Hedelberto López Blanch - Cubainformación.tv**

## **COLOMBIA**

**“SE ACABÓ LA GUERRA, OJALÁ QUE NUNCA VUELVA”**

LA HABANA – La firma de los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” suscritos el jueves 23 de junio en La Habana, suponen el fin de la guerra que desde

hace más de 52 años ha enfrentado en Colombia a la guerrilla campesina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y al Estado colombiano.

Tras tres intentos de paz fallidos, en 1984, 1992 y 1998, el actual proceso de conversaciones de paz iniciado en Oslo y en La Habana en noviembre de 2012 se acerca a su fin y al inicio del llamado "post conflicto", sin duda más difícil aún que las conversaciones de paz, fase que consiste en la reincorporación a la vida civil de los antiguos combatientes guerrilleros y en la implementación de los distintos acuerdos parciales alcanzados para acabar con las causas estructurales de esta cruenta y prolongada guerra que ha provocado más de 250.000 muertos, medio millón de exiliados y 7 millones de desplazados internos.

A pesar del discurso abonado por los enemigos de la paz, el actual proceso de conversaciones ha avanzado rápidamente, habiendo sido el segundo proceso de paz más corto en el tiempo de los habidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de paz de El Salvador duró 10 años, 11 años el de Guatemala, más de 10 años el de Irlanda del Norte, 14 años el de Angola, y así podríamos seguir con los procesos de Sudáfrica, Burundi, Tayikistán, Sierra Leona... Todos ellos duraron en torno a los 10 años. Únicamente el proceso de paz de Nepal ha durado algo menos que el actual proceso de paz en Colombia, 4 años exactos. Sin duda no es lo más importante la duración de un proceso de paz sino que este llegue a buen término, pero desgraciadamente la Mesa de Conversaciones de La Habana ha trabajado desde hace más de dos años con la espada de Damocles del tiempo pendiendo sobre sus cabezas, falaz argumento esgrimido por los distintos sectores económicos y políticos que pierden su razón de ser, o sus beneficios, con la llegada de la paz, argumento que el Gobierno de Colombia –siempre pendiente de las encuestas de opinión política– ha utilizado en más de una ocasión para presionar a su contraparte en la mesa de conversaciones. Pero hoy estamos de enhorabuena, porque la firma del Acuerdo Final de paz es algo ya cercano –quizás un mes, dos como mucho– y sobre todo es irreversible.

Esto no significa que los problemas en Colombia, las desigualdades entre el campo y la ciudad, entre los más ricos y los más pobres, entre las mujeres y los hombres, entre los criollos y los indígenas o los afro descendientes –es el país más desigual de América Latina y uno de los más desiguales del mundo, según el coeficiente de Gini–, desigualdades que ocasionaron este último conflicto armado y los muchos que lo precedieron, vayan a desaparecer por la firma del Acuerdo de Paz. En Colombia el 53% de la tierra aprovechable está en manos de 2.300 personas y el 58% de los depósitos bancarios en manos de 2.681 clientes.

El post conflicto será una intensa batalla contra esas desigualdades y del éxito de la implementación de los acuerdos parciales alcanzados, dependerá que Colombia entre irreversiblemente en la senda de la paz, la consolidación democrática y el progreso o que este acuerdo pase a la historia como uno más de las decenas de acuerdos de paz fallidos para poner fin a conflictos internos que, de forma sucesiva, ha habido en Colombia desde su independencia del dominio español el 7 de agosto de 1819. La principal responsabilidad recaerá en los poderes públicos y las instituciones colombianas, quienes con el apoyo de la comunidad internacional –un apoyo ojalá que irrestricto– deberá garantizar la implementación de los acuerdos, eludiendo la maldición que ha asolado a la inmensa mayoría de los procesos de paz habidos en el mundo en los últimos sesenta años, en los cuales el cumplimiento de las medidas de desarrollo social y económicos plasmados en los acuerdos finales ha sido más que deficiente, como acreditan la mayoría de las evaluaciones de cada uno de esos procesos de paz realizadas a fecha de hoy.

Desde noviembre de 2012 en La Habana se han alcanzado acuerdos sobre "Reforma Rural Integral" –el abandono por el Estado del campo y de los pequeños campesinos y la negación del derecho de propiedad de la tierra a estos, es el origen del actual conflicto armado–; "Participación Política" –en Colombia los partidos tradicionales, el llamado "establecimiento", ha acostumbrado a exterminar físicamente a cualquier alternativa política organizada que amenazara la continuidad de la alternancia entre liberales y conservadores–; "Sustitución de cultivos de uso ilícito" –los cultivos ilícitos han sido en la práctica el único medio que para sobrevivir han tenido los pequeños campesinos y las comunidades rurales, los únicos productos que podían comercializar–; "Descontaminación de Restos Explosivos de Guerra, Municiones sin explotar y minas antipersonas" –Colombia es uno de los países del mundo más contaminado por estos explosivos, obviamente en

las zonas rurales–; “Victimas. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No repetición” –el único acuerdo sobre justicia transicional alcanzado en un mesa de conversaciones que respeta estrictamente los contenidos del derecho internacional en vigor y que supone el sometimiento de ambas partes a una justicia especial para la paz–; “Búsqueda de personas desaparecidas” –según datos oficiales, en Colombia existen más de 50.000 desaparecidos por motivos relacionados con el conflicto interno, solamente desde los años 80 hasta hoy–; y ahora los acuerdos sobre “Cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades”, “Dejación de armas” y “Garantías de seguridad y desmantelamiento del paramilitarismo” .

Este último acuerdo sobre desmantelamiento del paramilitarismo es de una especial importancia. El fenómeno de los ejércitos privados en Colombia, habitualmente creados y al servicio de los terratenientes y ganaderos, los denominados “paramilitares”, hace tiempo que escapó del control del Estado, a pesar de haber sido utilizados en especial por la Fuerza Pública en su combate contra las distintas insurgencias guerrilleras. Según los datos de la “Unidad de víctimas” del Ministerio de Interior de Colombia, entre 1980 y 2012 se produjeron 1.166 masacres ejecutadas por grupos paramilitares, 1 cada 10 días. En muchos casos las masacres duraban días, hasta semanas, y se producían en la cercanía de bases militares. En ninguna de esas masacres la Fuerza Pública llegó a intervenir, ya fuera para impedir las o para detenerlas, nunca hubo enfrentamientos entre Ejército y paramilitares. Hoy día, las denominadas “bandas criminales” u “organizaciones sucesoras del paramilitarismo” controlan en monopolio las rutas de exportación de cocaína a Europa y a los Estados Unidos, así como innumerables fenómenos de delincuencia organizada común. Tras el proceso de paz de Casa Verde, iniciado en 1984 entre las FARC EP y el Gobierno de Belisario Betancur, grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado asesinaron a más de 5.000 militantes de la Unión Patriótica, la fuerza política de izquierdas nacida en el seno de dicho proceso de paz. Ese riesgo, muy cierto hoy día, es el que el Gobierno colombiano, con el apoyo de toda la comunidad internacional, debe conjurar, dando un combate frontal hasta el desmantelamiento total de los ejércitos privados, objetivo alcanzable con la estricta implementación del acuerdo alcanzado en la Mesa de Conversaciones sobre “Garantías de Seguridad”, garantías no solamente para los guerrilleros que van a dejar las armas, sino necesariamente extensivas a las comunidades campesinas, fuerzas políticas, grupos étnicos, defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y tantos otros y otras ciudadanos colombianos en permanente amenaza o riesgo a su integridad por trabajar por un país más justo y equitativo.

La Unión Europea ha venido acompañando este proceso en los últimos años, de forma activa en los últimos meses. El Enviado Especial de la UE para el proceso de paz, el ex ministro irlandés Sr. Eamon Gilmore, ha acudido a La Habana en varias ocasiones, reuniéndose con ambas partes y ofreciendo ayuda económica para la construcción de la paz, si bien se trata de una ayuda aún insuficiente: el apoyo financiero de la UE será distribuido en tres etapas, la primera pondrá a disposición recursos inmediatos para atender 24 requerimientos que ya fueron acordados con el ministro para el post conflicto, Rafael Pardo. La segunda etapa girará en torno al denominado Fondo Fiduciario de la Unión Europea, que actualmente alcanza la muy limitada cifra de 90 millones de euros, y su uso principal será apoyo al desarrollo rural. La última fase será la financiación de proyectos de infraestructura para el post conflicto, a través del desembolso de créditos hasta por 400 millones de euros que saldrán de la Banca de Inversión Europea. Créditos reembolsables, es decir, no se trata estrictamente de cooperación. Habremos de estar atentos a las condiciones de reembolso que se impondrán a dichos créditos para que realmente ayuden y no lleguen a dificultar la construcción de la paz.

Alemania ha sido el país de la UE que más activo se ha mostrado en el apoyo al proceso de paz en Colombia, con la designación hace más de un año del Diputado Tom Koenigs como Comisionado del Ministro de Relaciones Exteriores para el proceso de paz, mientras que el Banco de Crédito para la Reconstrucción y el Desarrollo, entidad pública alemana, ha comprometido a fecha de hoy 75 millones de euros para el post conflicto y la construcción de paz.

El enviado especial Koenigs se ha mostrado especialmente comprometido con la paz, ayudando a la buena marcha del proceso con pronunciamientos sobre los problemas concretos que enfrenta el post conflicto: *“Los sucesores del paramilitarismo contradicen claramente a todos los protagonistas*

*(guerrilla, gobierno, sociedad civil, víctimas, etc.) y contenidos (reforma agraria, reparación a víctimas, devolución de tierras, fin del narcotráfico, justicia, no repetición, etc.) de los acuerdos de paz, y son una grave amenaza para su realización” o “Resulta sorprendente que las víctimas de todas las partes y sus asociaciones correspondientes, con unas pocas excepciones, apoyan el acuerdo (de Justicia Transicional y Víctimas) y están dispuestas a adjudicar una mayor importancia a los elementos de verdad, reparación y no repetición que a la severidad de las penas judiciales, mientras que los políticos de la derecha quieren ver restablecida la dignidad de las víctimas únicamente por penas de prisión” (2º Informe al Bundestag de T. Koenigs, 30 abril 2016).*

En comparación, la diplomacia española, dependiente de su trabajo en América Latina para mantener su peso específico en el panorama diplomático internacional, ha estado ausente de este proceso de conversaciones, especialmente si se compara con su activa participación en los tres anteriores procesos de paz, fallidos, habidos entre las FARC EP y el Gobierno de Colombia. Este desentendimiento probablemente tiene que ver con el papel muy activo que la diplomacia española – tanto en los gobiernos de Aznar, de Rodríguez Zapatero como en el de Mariano Rajoy– desempeñó en el apoyo a la llamada “doctrina de la seguridad democrática” en Colombia, implementada por el Presidente Álvaro Uribe entre los años 2002 y 2010, y que lejos de acabar militarmente con la guerrilla –como se proponía– provocó pavorosas situaciones de violaciones a los derechos humanos, como los llamados “falsos positivos” –más de 4.000 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes colombianos desempleados o marginales a los que el Ejército hacía pasar por guerrilleros abatidos en combate con el fin de mostrar resultados– o las denominadas “chuzadas del DAS”, espionaje a defensores de derechos humanos, jueces, políticos opositores y periodistas, que acabó con la disolución del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) –servicio de inteligencia dependiente directamente de la Presidencia de la República– y el procesamiento de la mitad de su plantilla, tras ser calificado por los tribunales colombianos como una “organización criminal”.

El proceso de paz está llegando a buen término gracias al acompañamiento internacional, especialmente de los países de la América Latina que han visto en la paz de Colombia la paz de todo el continente. Junto al activo papel desempeñado como país garante por Noruega –sin duda la diplomacia con mayor especialización y eficacia en procesos de paz de cuantas existen hoy día–, Cuba ha sido el otro país garante, que además de poner a disposición su territorio y las debidas condiciones de seguridad para que avanzara el proceso, ha sabido garantizar el apoyo político de la región al proceso, a la vez que –conjuntamente con Noruega– ha desplegado un imprescindible pragmatismo diplomático que ha permitido sortear los muchos desencuentros que entre las partes ha habido durante las conversaciones. El papel de países acompañantes desempeñado por Venezuela y Chile han ayudado a destrabar problemas y a sumar más apoyos a la causa de la paz. Finalmente, a partir de enero de 2015 la Administración estadounidense del Presidente Obama, con la designación del diplomático Sr. Bernard Aronson como enviado especial para el proceso de paz, también ha desempeñado un papel constructivo en las conversaciones, quizás no todo lo comprometido que pudiera haber sido a la vista de la influencia internacional de los EEUU, pero sin duda un apoyo a la paz en Colombia que nunca antes de forma tan explícita comprometió una administración estadounidense. La reunión celebrada el pasado mes de marzo entre el Secretario de Estado Sr. Kerry y la comandancia de las FARC EP en La Habana, supuso un evidente reconocimiento político a esta organización guerrillera, a pesar de que, inexplicablemente, aún sigue incluida en las arbitrarias listas de organizaciones “terroristas” de la Unión Europea, del Reino Unido y de los propios Estados Unidos.

Aún quedan acuerdos imprescindibles de alcanzar para la firma del Acuerdo Final de Paz. Los más importantes, los relacionados con la reincorporación de los antiguos combatientes a la vida civil, las zonas donde se producirá dicha reincorporación, la imprescindible y urgente amnistía –prevista expresamente en las Convenciones de Ginebra a la finalización de un conflicto armado interno–, las necesarias Garantías de No repetición –revisión de la doctrina de seguridad y militar de Colombia y su adaptación a una sociedad en paz donde la población civil nunca más sea considerada un enemigo– y la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre otras cuestiones de índole menor. Pero la firma este jueves en La Habana de los tres acuerdos que de facto ponen fin a la guerra, es la mejor garantía para alcanzar los acuerdos parciales restantes, de forma irreversible, en unas pocas semanas.

A partir de la firma del Acuerdo Final de Paz, será la comunidad internacional la que deba coger el relevo de la Mesa de Conversaciones de La Habana. Sin un acompañamiento firme e imparcial de la comunidad internacional, en especial de los países de América Latina y el Caribe y de las Naciones Unidas, será muy difícil verificar el cumplimiento de los acuerdos y acabar con las causas del conflicto. Es imprescindible garantizar un periodo de post acuerdo eficaz, donde la implementación de lo firmado sea una realidad y no se defrauden las expectativas de los colombianos y colombianas, en especial de aquellos que han vivido en primera persona la guerra, generación tras generación, en las zonas rurales del país. Una Colombia en paz abrirá la puerta a la solución de varios problemas mundiales, entre ellos el los cultivos susceptibles de unos ilícito y el narcotráfico o el desplazamiento de población. Colombia es un país dotado de inmensas potencialidades, sin duda la más importante reside en las personas que habitan en él, gente trabajadora y cordial, culta y emprendedora, con una envidiable formación académica y científica. El compromiso de la comunidad internacional con esta paz que viene, tan difícil y generosamente construida entre todas, se verá cumplido cuando portar un pasaporte colombiano sea definitivamente motivo de orgullo y dignidad, nunca más un estigma.

**Enrique Santiago**

## **"EL PUNTO CENTRAL PARA EL FIN DEL CONFLICTO ARMADO TENDRÁ QUE VER CON LO QUE PASE EN EL CAMPO COLOMBIANO"**

### **Entrevista a Renán Vega Cantor, Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional (Bogotá)**

**M.H.:** Se llevó adelante un paro nacional en Colombia, con más de 100 puntos de concentración en el país, que despertó la solidaridad nacional e internacional demostrados en los actos realizados en las embajadas colombianas en Argentina, Chile, países de Europa. Inclusive 32 eurodiputados le enviaron una carta al Presidente Juan Manuel Santos manifestando la preocupación por el abuso de la fuerza contra los manifestantes quienes sufrieron hechos graves, como el asesinato de tres indígenas, una acción arbitraria donde hubo 135 detenidos, 24 acontecimientos relatados como hostigamiento e inteligencia ilegal, más de 150 heridos en alrededor de 20 municipios atacados por el escuadrón antidisturbios. A pesar de la represión y la violencia que sufrieron los convocantes a este paro nacional, ¿cuáles fueron los logros y qué podemos marcar como déficit de esta medida de fuerza?

**R.V.C.:** Lo que Ud. acaba de señalar es preciso. El trasfondo de movilización social de campesinos y disidentes en Colombia ha estado marcado por una fuerte represión. Es costumbre en Colombia en los últimos 30 años que cualquier protesta, por organizada y pacífica que sea, cuenta con una respuesta brutal por parte del Estado y los organismos de seguridad de las FF. AA. Este caso no ha sido la excepción, como ha mencionado usted hay 3 muertos, numerosos heridos y judicializados y además todo un ambiente de desprestigio de la protesta.

Es importante señalar esto, porque si se llega a firmar un acuerdo entre el gobierno colombiano y las FARC, el asunto es si hacia el futuro este tipo de manifestaciones van a seguir teniendo este tipo de trato. Porque este tratamiento represivo pertenece a un tiempo ya desaparecido de nuestros países y del mundo, aunque ahora retorna con la presencia de gobiernos neoliberales en muchos de nuestros países y es propio de la época de la Guerra Fría, en la cual cualquier sector social, sin importar la naturaleza de sus reivindicaciones, era tratado como un enemigo interno, un enemigo del Estado y un enemigo de las clases dominantes.

Este paro presenta esta característica, y lo que resulta paradójicamente lamentable es que lo haga un gobierno que tiene un discurso de paz que ha promocionado fuera del país para decir que se acerca el fin del conflicto armado, resulta que el post conflicto no se puede entender en la lógica del gobierno con el hecho de que la gente deje de protestar y exigir sus justas reivindicaciones.

Los campesinos son uno de los sectores más golpeados de la sociedad colombiana de los últimos 30 años y se ha profundizado en los últimos 5 años con el Tratado de Libre Comercio (TLC), los campesinos han quedado absolutamente desprotegidos, la producción agrícola no tiene ningún tipo de cuidado por parte del Estado colombiano, han llegado todo tipo de productos del exterior, agrícolas y pecuarios lo que ha profundizado la pobreza del sector. A esto hay que sumarle que el

campo colombiano no se destina ahora prioritariamente para la siembra de productos alimenticios, sino para la producción de cultivos de exportación realizados por los grandes capitales nacionales e internacionales y para la explotación minera.

Estamos hablando de un sector terriblemente perseguido no solo en términos militares, opresivos, políticos sino también en términos económicos y sociales lo cual pone presente que la política del gobierno de Juan Manuel Santos en términos del campo colombiano no es de paz, sino de guerra. Es bueno señalar esto porque el punto central al fin del conflicto armado tiene que ver con lo que pase en el campo colombiano, si no se impulsan otro tipo de políticas que rompan con el poder de los grandes propietarios, de los grandes terratenientes, de las multinacionales y que reconozca la importancia de los campesinos para la economía colombiana, estamos hablando de un sector formado por 15 millones de personas, 30% de la población colombiana, el origen del conflicto va a perdurar así se llegue a acuerdos que le pongan fin a la lucha armada.

**M.H.: No me queda claro si luego de esta lucha tenaz de los campesinos colombianos, en el caso específico de este paro nacional, han conseguido alguna de las reivindicaciones planteadas.**

**R.V.C.:** En realidad este paro es como un segundo tiempo de un partido que se había iniciado en 2013, cuando se realizó un extraordinario paro agrario que tal vez haya sido el más importante de Colombia en los últimos 35 años. El paro de 2013 tenía una serie de exigencias, 6 puntos principales: solicitaba que se impulsaran medidas para enfrentar la crisis de la producción agropecuaria, se garantizara el acceso a la tierra por parte de los pequeños y medianos propietarios y se le diera un reconocimiento especial a la territorialidad campesina, era una forma específica de manejo de sus tierras y su territorio que va más allá de la propiedad de la tierra por parte de los campesinos, que se permitiera la participación de los pequeños y tradicionales mineros en la formulación de las políticas mineras, que se garantizara el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, que no fueran sometidos a la represión y que se exigiera una inversión social en el campo para garantizar la educación, la vivienda y los servicios públicos.

Esas grandes solicitudes de 2013 quedaron en el papel, el gobierno de Juan Manuel Santos en ese momento negó el paro, cuando estaba paralizado todo el país en una declaración tragicómica dijo que no había tal paro, después ante la presión del movimiento se reunió y se comprometió a tener en cuenta las solicitudes del paro, pero a la fecha, casi 3 años después prácticamente ninguno de estos acuerdos se ha cumplido.

Entonces, los campesinos se han movilizado para que se pongan en práctica los acuerdos de 2013 que el gobierno firmó pero que hasta el momento no ha llevado a la práctica. En los acuerdos recientemente firmados aparecen las mismas solicitudes de 2013, por ejemplo, hay 4 puntos fundamentales, primero un asunto de garantías de la movilización de la gente, que no se los reprima, que no se los mate ni persiga, que existan garantías reales para la movilización y la protesta social y que se deje de ver a los campesinos como enemigos de la nacionalidad colombiana, como representantes de intereses foráneos y otras excusas que se utilizan para perseguir cualquier protesta.

Al mismo tiempo, no se realizan medidas reales para eliminar el paramilitarismo en el campo colombiano, porque la zona rural del país ha sufrido un proceso de paramilitarización, es decir, presencia de fuerzas armadas financiadas por los terratenientes y propietarios, sostenidos por las FF. AA. y el Estado, que todos los días en cualquier lugar de la geografía colombiana asesinan a un campesino. Que se garanticen los derechos humanos de los indígenas y campesinos colombianos, pasa por derrotar al paramilitarismo.

En tercer lugar hay solicitudes territoriales, que se reconozcan mecanismos particulares de la territorialidad de los campesinos indígenas. Hay una serie de acuerdos firmados hace 22 años en una Ley de tierras en donde se reconocía lo que se llaman "zonas de reserva campesina". Y en cuarto lugar se plantea la necesidad de que los habitantes del campo participen activamente en la elaboración de una legislación minero-energética que se oponga a la entrega generalizada de las zonas mineras a las empresas multinacionales. Esta es parte de la agenda de 2013 que se reedita ahora para exigir su cumplimiento.

**M.H.: ¿Cuál ha sido la reacción de la población urbana frente a este paro nacional agrario?**

**R.V.C.:** En este sentido los medios de comunicación dominantes, como siempre, tienen un papel fundamental, Colombia es un país profundamente antidemocrático en términos de comunicación, estamos bajo la dictadura de dos grandes empresas que controlan la TV y la radio, que a su vez son propiedad de los grandes empresarios del país. Para ellos una protesta de este tipo no es noticia, siendo que mientras tanto estamos en la Copa América, hubo poco cubrimiento por estos medios y prácticamente en las ciudades no se enteraron del asunto, salvo en ciudades más cercanas al epicentro del paro como las de Popayán y Cali en el occidente colombiano. Se ha difundido por medios alternativos, internet y redes sociales donde se han podido hacer las denuncias sobre la represión y los asesinatos, eso es lo que se ha conocido en las ciudades, pero los grandes medios de comunicación no presentaron al paro como noticia.

**M.H.: El miércoles pasado, el Presidente argentino Mauricio Macri y su par colombiano, Juan Manuel Santos firmaron una gran cantidad de convenios, casi 40. En particular entre esa multitud de acuerdos se incluyó la predisposición argentina a enviar militares “desarmados” en dos proyectos vinculados con el proceso de paz que en este momento están discutiendo el gobierno de Colombia con las FARC. ¿Cuál es tu visión de esta predisposición argentina y tu balance del encuentro entre los Presidentes Macri y Santos?**

**R.V.C.:** Voy a comenzar por el segundo punto, hay un proyecto andando hace algunos años que consiste en volver a revivir el ALCA que fue enterrado en Argentina hace más de 10 años en la célebre manifestación en la que participaron Chávez, Maradona y otros. Sin embargo, después de que distintos gobiernos y movimientos sociales de Sudamérica y América Latina desmontaron el proyecto, EE. UU. se ha dado la tarea de revivir el ALCA con otro nombre.

Uno de los mecanismos ha sido el Acuerdo del Pacífico donde Colombia juega un papel importante junto con Chile, Perú y México. Ahora tengo entendido que Macri ha pedido participar y lo han integrado como observador. Esta es la ruptura de todos los proyectos de integración latinoamericana como el Mercosur, el ALBA, Petrocaribe y todo tipo de proyectos que a pesar de muchas dificultades intentaron organizar algo alternativo a la hegemonía de EE. UU. en el continente.

Colombia forma parte de este acuerdo y ahora el acercamiento con Macri se inscribe en ese marco de proyectos neoliberales de negociar por encima de los intereses de los pueblos latinoamericanos, en favor de los intereses de las multinacionales y para un libre mercado que permita el ingreso del capital transnacional de EE. UU. y otros lugares del mundo. Creo que el objetivo máximo de la presencia de Macri en Colombia se inscribe en esa perspectiva y con ese derrotero.

Hay que decir que Macri en las intervenciones que hizo en Colombia reiteró de manera permanente su oposición al gobierno venezolano mediante una injerencia descarada, pidiendo que los asuntos de Venezuela se resolvieran de acuerdo a su criterio, que se realice el referéndum sin tener en cuenta la política interna de Venezuela y el gobierno colombiano no manifestó ninguna postura en contra de esas manifestaciones del Presidente argentino.

En cuanto al primer punto que usted plantea, de la intervención de militares extranjeros en Colombia, es un asunto complicado teniendo en cuenta la trayectoria guerrillera interna que lleva más de 60 años. Creo que antes que militares lo que nosotros necesitaríamos son cuerpos de paz, pero no cuerpos de paz en el sentido demagógico, sino gente que llegue al campo colombiano a las zonas desoladas por la guerra, que envíen maestros, médicos, investigadores, biólogos interesados en aportar a la situación de las comunidades que han vivido esta guerra. El solo hecho de traer militares, así sean desarmados, me parece una postura que no ayuda.

**Mario Hernandez – Rebelión**

## **HONDURAS**

### **LA MACCHI: MUCHA HOJA Y POCA CARNE**

Hay una gran expectativa en el pueblo hondureño sobre el trabajo que realiza la Misión de apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Macchi) de la OEA, pero sobre todo en la efectividad de este trabajo en cuanto a reducir los niveles de corrupción e impunidad que existen el país, combatiendo

principalmente sus causas institucionales explicativas. La Macchi, según el convenio de creación, no está facultada para perseguir el delito cuya competencia es de operadores de justicia como la Fiscalía, pero puede hacer recomendaciones a dichos operadores y supervisar su desempeño en el cumplimiento de las funciones asignadas.

Este es quizá el principal cuello de botella de la Misión, ya que los operadores de justicia son controlados por el Presidente de la República, incluyendo además de la Fiscalía, el Tribunal de Cuentos y la Corte Suprema de Justicia.

Inicialmente se quiso desviar la atención del trabajo de la Macchi, asignándole el caso del asesinato de la dirigente ambientalista Bertha Cáceres, pero los familiares de la víctima lo rechazó y sigue pidiendo una Comisión Independiente de las Naciones Unidas en tanto todavía no se ha capturado a los actores intelectuales del crimen. Igual los miembros de la Macchi están dispuestos a entrarle al caso del robo del IHSS, pero todavía no existe una agenda de trabajo que considere como objetivo público acelerar el proceso de juzgamiento a los funcionarios capturados, revisar la situación financiera antes y después del saqueo, análisis de los casos donde se involucran a connotados dirigentes políticos y empresarios, las empresas de maletín y el financiamiento de campañas políticas con dichos fondos, el involucramiento de políticos en la suscripción de contratos de compra de equipos, el robo de medicamentos y la muerte por falta de atención de pacientes.

Otro frente de trabajo es la certificación de jueces para combatir la corrupción e impunidad. Se pensó que los miembros de la Macchi deberían certificar dichos jueces, pero después se llegó a la conclusión que está se realizaría en forma conjunta con miembros de la Corte Suprema de Justicia. En la actualidad uno de los magistrados de dicha Corte, miembro del partido de gobierno y acusado de actos de corrupción, ha sido propuesto para presidir dicha Comisión de selección y certificación de los Jueces; los miembros de la Macchi son del criterio que el Presidente de la Corte Suprema tome la decisión de nombrar a dicho magistrado. Se espera que la Fiscalía concluya las diligencias del caso, y si sale limpio debe ser nombrado, aun cuando el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) tiene todas las pruebas que involucran al Magistrado y a otro diputado del Congreso Nacional.

El CNA goza de credibilidad en la ciudadanía, al grado que frente a una denuncia de sobrevaloración de una compra de vehículos sin licitación por la directora del CNA, la Embajada Americana y otras agencias de cooperación y organizaciones de sociedad civil se aprestaron a apoyarla. Lo recomendable en este caso, es que se nombre a otro miembro magistrado de la Sala Penal para presidir la Comisión aunque sea de afiliación liberal; total existe una alianza entre ambos partidos para la “governabilidad democrática” del país.

La Macchi trabaja en la elaboración de una propuesta de Ley para regular el financiamiento de los partidos políticos, para que no sean copados por el Narcotráfico y funcionarios corruptos del Estado. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha prestando una propuesta a la Macchi para que sea evaluada, donde se establece un techo de cerca de 1 millón de lempiras de financiamiento privados a cada partido, la cual se suma a la presentada al Congreso por el Poder Ejecutivo y otra por el diputado Edwin Pavón del partido “bisagra” UD.

Este es quizá el único tema consensuado entre miembros de las bancadas de los partidos políticos en el Congreso de la República, no así la aprobación de una nueva Ley Electoral exigida por LIBRE, PAC y el PINU-SD, que permita mayor participación de las fuerzas de oposición frente al control tradicional del bipartidismo y los partidos bisagras, modernice el Registro Nacional de las Personas (RNP) donde se denuncia a diario el tráfico de tarjetas de identidad, un mayor control de las inscripción de los nuevos partidos y aplicación inmediata de penas por violaciones de principios democráticos.

En las elecciones pasadas estos partidos sacaron menos votos de los requeridos para seguir vigentes, pero la Corte Suprema en clara violación a la Ley Electoral, los habilitó de nuevo para participar en la próxima contienda electoral de 2017. El coordinador del PAC, Salvador Nasralla, denunció que su inscripción es promovida por el Partido de Gobierno para que sus dirigentes entreguen credenciales a militantes del partido nacional y sean estos los que participen en las mesas electorales.

La Maccih debería al menos pronunciarse sobre esta práctica antidemocrática y corrupta, caso contrario sin quererlo puede avalar desde ya un nuevo fraude electoral en las elecciones generales, lo que supondría su retiro de Honduras antes de tiempo.

El problema del financiamiento de las campañas políticas tiene otras "aristas", ya que además de poner un techo a los recursos financieros aportados por privados, es urgente regular el uso de los recursos de Estado para objetivos políticos en el caso particular del partido en el poder; ello es más evidente cuando los tambores "bwna" dicen que la reelección del presidente Hernández va y nadie la detiene. En tal sentido, los partidos de oposición competirán en desventaja frente a la maquinaria azul-gubernamental. Una muestra de ello, es la calidad del papel, diseño y organización de la consulta ( más de 30,000 activistas se movilizan en todo el país) que realizan los nacionalistas para avalar la candidatura única del Presidente Hernández y exigir al Congreso Nacional su reglamentación en las próximas elecciones y la que promueve el ex presidente Zelaya para ver si el pueblo de LIBRE está de acuerdo en que se lance también como candidato a la presidencia de la Republica en caso que Juan Orlando Hernández también lo haga.

El proceso de depuración de la Policía Nacional avanza en forma lenta, especialmente las investigaciones sobre el enriquecimiento ilícito de Comisionados y Subcomisionados separados, suspendidos y reintegrados, ya que el trabajo del Tribunal Superior de Cuentos sobre evacuación de expedientes e informes camina a paso de tortuga; aducen que la Ley de Secretos les prohíbe brindar información clasificada como confidencial a los miembros de la Misión. Hay un clamor nacional para que esta Ley sea derogada; caso contrario, la Macchi tiene poco margen de acción en este campo. Igual, urge la llegada de los expertos en lavado de activos y manejo de fondos ilícitos por la banca privada.

Hay que agilizar el paso y construir una hoja de ruta en función de los objetivos y metas propuestos, incluyendo otros casos adicionales de posibles actos de corrupción en la negociación de los contratos, por ejemplo el contrato para la construcción del Aeropuerto Internacional Palmerola donde diputados del Congreso Nacional y empresarios están pidiendo su derogación.

El Reunionismo burocrático y la publicidad de los miembros de la Maccih abona muy poco a esto, ya que el pueblo lo que espera son resultados concretos en los llamados casos emblemáticos como el del IHSS. Caso contrario, estaremos cumpliendo el primer año de la Maccih en Honduras sin nada que celebrar.

Fuente: <http://www.alainet.org/>

## MÉXICO

### **DESDE LA TEMPESTAD**

Comunicado Conjunto del Congreso Nacional Indígena y el EZLN sobre el cobarde ataque policíaco contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la comunidad indígena de *Nochixtlán*, Oaxaca.

Al Pueblo de México.

A los pueblos del Mundo:

Frente el cobarde ataque represivo que sufrieron los maestros, maestras y la comunidad en *Nochixtlán*, Oaxaca, -con que el Estado Mexicano nos recuerda que esto es una guerra contra todos y todas-; los pueblos, naciones y tribus que integramos el Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, le decimos al magisterio digno que no está solo, que sabemos que la razón y la verdad están de su lado, que la dignidad colectiva con la que habla su resistencia es inquebrantable y ésta es la principal arma de los que de abajo somos.

Repudiamos la escalada represiva con la que pretenden imponer en todo el país la reforma neoliberal capitalista a la que llaman "educativa", principalmente en los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Con amenazas, persecuciones, golpes, encarcelamientos injustos y ahora asesinatos se quiere doblegar la dignidad del magisterio en rebeldía.

Llamamos a nuestros pueblos y a la sociedad civil en general a estar con el magisterio que resiste en todo momento, a reconocernos en él, pues la violencia para despojarlos de garantías laborales básicas con el propósito de hacer privada la educación, es un reflejo de la violencia con la que nos están despojando a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos y urbanos.

Quienes se regocijan en el poder decidieron que la educación, la salud, los territorios indígenas y campesinos, e incluso la paz y seguridad, son una mercancía para quien pueda pagarla, que los derechos no son derechos sino productos y servicios que se arrebatan, se despojan, se destruyen, se negocian según lo dicte el gran capital. Y esta aberración pretenden imponerla de una manera sangrienta; asesinando y desapareciendo a nuestr@s compañer@s, enviando a prisiones de alta seguridad a nuestr@s vocer@s, haciendo de la tortura descarada la mercadotecnia gubernamental y, con ayuda de los medios de comunicación de paga, equiparando con la delincuencia a lo más valioso de la sociedad mexicana, es decir a quienes luchan, no se rinden, no se venden y no claudican.

Exigimos el cese a la represión en contra del magisterio en lucha y la liberación inmediata e incondicional de TODOS los presos políticos.

Invitamos a todos los pueblos del campo y las ciudades a estar atentos y solidarios con la lucha magisterial, a organizarnos de forma autónoma para estar informados y alertas ante esta tormenta que cae sobre todas y todos, sabiendo que una tormenta, además de tempestad y caos, también hace fértil la tierra de donde nace siempre un nuevo mundo.

Desde las montañas, campos, valles, cañadas y barrios de los pueblos, naciones y tribus originarios de México.

¡Nunca más un México Sin Nosotros!

Congreso Nacional Indígena.  
**Ejército Zapatista de Liberación Nacional.**  
México, a 20 de junio del 2016.

## NICARAGUA

### **CRISIS INSTITUCIONAL ASOMA EN PANORAMA ELECTORAL DE NICARAGUA**

La séptima candidatura consecutiva de Daniel Ortega a la presidencia de Nicaragua y el retiro de buena parte de la oposición de las próximas elecciones, al alegar falta de garantías, coloca al país ante una crisis sin precedentes desde el fin de la guerra civil, en 1990.

El presidente, un antiguo guerrillero de 71 años que gobierna este país centroamericano desde 2007, busca su reelección en los comicios del 6 de noviembre. De ganarlos, le mantendría en el poder hasta 2021 y superaría así los periodos de la dictadura somocista.

Su nueva candidatura es posible gracias a una interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo control del gobernante e izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que en 2011 dictaminó que el artículo de la Constitución que prohibía la reelección continua, violaba el derecho de Ortega a ser candidato.

“(La situación futura) dependerá de la capacidad que esa oposición tenga para provocar inestabilidad en el sistema electoral, tras haber anunciado su retiro oficial de la contienda”: Humberto Meza.

Por ello, el máximo tribunal derogó el candado constitucional contra la reelección inmediata.

El 15 de junio, el camino electoral le quedó aún más allanado a Ortega, cuando la opositora Coalición Nacional por la Democracia fue empujada a retirarse del juego electoral tras la anulación de la candidatura de su dirigente con más opciones, Luis Callejas.

Previamente, el máximo tribunal quitó la representación legal a la dirección del Partido de Liberación Independiente (PLI), el mayor de la coalición, y la entregó a una facción afín al FSLN. Algo similar sucedió a otra organización con la que la coalición iba a aliarse.

Esas medidas, a juicio de la oposición y otros sectores internos, resquebrajaron la institucionalidad del país y puso una sombra de duda sobre la validez de los comicios.

Para el investigador social Nicolás López Maltez, miembro de la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, Ortega se ha postulado a la presidencia como nadie más lo ha hecho en Nicaragua y América Central en los últimos 150 años.

“Lleva siete postulaciones seguidas desde 1984. Perdió las elecciones de 1990, las de 1996 y las del año 2001, luego ganó en 2006, en 2011 y en 2016 ya está oficialmente postulado”, detalló a IPS el académico.

Ortega alcanzó por primera vez el poder en 1979, cuando el guerrillero FSLN derrotó al último miembro de la dinastía Somoza, cuya cruenta dictadura gobernó el país durante 43 años consecutivos.

Tras gobernar como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, se postuló por primera vez a la presidencia en 1984, cuando ganó el poder para el quinquenio 1985-1990.

Perdió los comicios de 1990, al final de una guerra civil que respondió a las presiones militares y políticas de Estados Unidos, mediante una oposición armada contra la revolución sandinista.

Según opinó López Maltez en consonancia con otros analistas, Ortega ha pasado a controlar todos los poderes institucionales, lo que le asegura su triunfo en noviembre en las urnas.

Si ese pronóstico se confirma, en 2018 Ortega se convertirá en el presidente nicaragüense con más tiempo en el poder, al superar los 16 años del exgeneral liberal José Santos Zelaya (1893-1909) y Anastasio Somoza García (1937-1947 y 1950-1956).

La dinastía de los Somoza mantuvo dominada a Nicaragua en una opresiva dictadura desde 1937 a 1979 mediante tres miembros de la familia o figuras de paja.

Los sondeos coinciden en que el presidente goza de amplio respaldo social y la confianza de grupos de poder como la empresa privada y los cuerpos policiales y militares.

Una encuesta de la empresa M&R Consultores, difundida en mayo, refleja que Ortega goza de 77,6 por ciento de respaldo positivo y su partido cuenta con 63,7 por ciento de la intención de voto.

“Durante los últimos 15 años varios presidentes latinoamericanos derribaron el mito que los politólogos habían convertido casi en ley, de que los presidentes iniciaban sus periodos con altos índices de aprobación y finalizaban desaprobados”, comentó a IPS el director de la firma encuestadora, Raúl Obregón.

A su juicio, la inclusión de Ortega en ese grupo se sustenta en varios factores.

El primero, adujo, es que Ortega se beneficia de la pérdida del miedo que la población le tenía al FSLN de volver a una guerra si ellos regresaban al poder, que concentró el mensaje opositor en las campañas electorales de 1990, 1996 y 2001.

En segundo lugar, planteó, Ortega ha realizado una buena gestión de la macroeconomía del país, reconocida por organismos nacionales e internacionales.

Ello se acompaña con la implementación de proyectos sociales de reducción de la pobreza que han beneficiado a los sectores más vulnerables del país.

Mientras, la derecha que gobernó el país entre 1990 y 2007, se fragmentó por luchas internas y su discurso perdió influencia entre los electores.

“No tiene nada que ver con los problemas y las necesidades de la población, ellos hablan de política mientras la población quiere escuchar propuestas para resolver sus problemas que son desempleo y carestía de la vida”, subrayó Obregón.

Nicaragua, con una población de 6,2 millones de habitantes, tiene a 38 por ciento de su población sumida en la pobreza, según organismos internacionales. Su padrón electoral se sitúa en 4,5 millones, según datos de 2012.

Más allá de lo que dicen las encuestas, la oposición política acusa a Ortega de manipular las leyes e instituciones a su favor para garantizarse los votos suficientes para sostenerse en el poder.

Sectores de oposición denunciaron como fraudulentos los resultados de los comicios municipales de 2008 y los generales del 2011, mientras observadores electorales del estadounidense Centro Carter y de la Unión Europea las calificaron de “poco transparentes”.

Este año, diversas organizaciones e instituciones, incluyendo la empresa privada, la Iglesia Católica y organizaciones de la sociedad civil, pidieron a Ortega mayor apertura política y observación electoral internacional para garantizar la transparencia en las elecciones.

Pero en mayo Ortega prohibió la observación electoral internacional y local y acusó a los observadores de “sinvergüenzas”.

Luego llegó la medida contra la dirección del PLI y la anulación de la candidatura de la Coalición Nacional Democrática, que aglutina a las principales fuerzas opositora. Cuando oficializó el retiro de los comicios, sus dirigentes explicaron que lo hacían para no avalar una “farsa electoral”.

Estas maniobras despertaron preocupación de organismos internacionales y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro.

Para el doctor en ciencias sociales Humberto Meza, las estrategias políticas de Ortega para perpetuarse en el poder “afectarán de forma drástica la legitimidad de las elecciones”, con independencia de su popularidad.

La CSJ “condena a una buena masa de votantes a no participar del proceso electoral”, adujo a IPS.

La evolución de la situación, a su juicio, “dependerá de la capacidad que esa oposición tenga para provocar inestabilidad en el sistema electoral, tras haber anunciado su retiro oficial de la contienda”, observó Meza.

Para el analista, “Nicaragua es un país polarizado, con mucha crítica que vive contenida por temor a las reacciones oficiales”.

Meza considera que la situación electoral es delicada y sin precedentes desde 1990.

Pero, a su juicio, “la democracia tiene muchas otras posibilidades de existir más allá del mecanismo del voto. Es a eso a lo que, parece, apuesta un buen sector de la oposición”.

El analista no ve “mayor impacto” en la crisis política interna de la manifestada preocupación del secretario general de la OEA o de la presión que pueda ejercer la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos.

Fuente: <http://www.ipsnoticias.net/>

## **PANAMÁ**

### **EL CANAL DE PANAMÁ SIN PLAN DE DESARROLLO NACIONAL**

La próxima semana se inaugura la ampliación del Canal de Panamá cuya construcción se inició hace nueve años y cuyo costo final aún está por determinarse. En todo caso, superará los \$5,25 mil millones presupuestados. La vía interoceánica se abrió por primera vez en 1914 para servir en especial la ruta entre las costas oriental (Nueva York) y occidental (San Francisco) de EEUU. En la actualidad, gran parte del comercio marítimo que hace uso del Canal navega por la ruta China oriental (Shanghai) y las costas este y del golfo de México (EEUU).

La vía es administrada por el gobierno panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desde 2000. El traspaso por parte de EEUU a Panamá fue el resultado del Tratado del Canal de Panamá cuya negociación culminó en 1977 bajo la dirección del general Omar Torrijos. En el mismo tratado entre Panamá y Washington, se acordó poner fin a la ‘Zona del Canal’ y evacuar todas las bases militares norteamericanas en el Istmo.

La ampliación del Canal consiste en la construcción de un tercer juego de esclusas para acomodar barcos de hasta 150 mil toneladas de desplazamiento. Además, se ampliaron las vías de acceso y se profundizó el Canal para aumentar el calado de los barcos que navegan por sus aguas. En el mundo sólo hay un Canal con características similares al panameño: El Canal de Suez en Egipto.

Cruzan el canal cerca de 12 mil naves al año, pagando peajes anuales de aproximadamente \$2.5 mil millones. Esta suma contrasta con los ingresos anuales de un millón de dólares que recibía Panamá por parte de EEUU antes de 2000. La ACP y el gobierno panameño aseguran que con las nuevas esclusas los ingresos crecerán significativamente. El fisco recibe anualmente - directamente de la administración de la vía - mil millones de dólares que es ingresado al presupuesto nacional.

El Canal de Panamá ha logrado mantenerse – en parte – libre de la corrupción que caracteriza a las instituciones privadas y públicas del país. Sin embargo, cuenta con una directiva compuesta de 11 empresarios cuyos antecedentes no se libran de cuestionamientos. La construcción de la ampliación estuvo marcada por sobreprecios y adendas cuestionadas por su falta de transparencia. La empresa contratada para la magna obra de las esclusas se caracterizó por su falta de ética, su mal manejo de la relación con los trabajadores y desgrefeo administrativo.

Una crítica al proyecto de ampliación del Canal de Panamá consiste en que los gobiernos no contemplan la integración de este enorme activo a la economía nacional. Seguirá siendo un negocio en el contexto de las operaciones financieras que se realizan en las capitales mundiales, especialmente Nueva York. Todavía tiene que poner a prueba los estudios de impacto ambiental que señalan la posibilidad que los lagos de la vía sean invadidas por agua salada. Otro problema que enfrenta la vía consiste en la falta de agua en el futuro para satisfacer las demandas de los barcos que transitan por la ruta.

A su vez, la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta del Canal de Panamá denunció un plan para la privatización de la vía interoceánica. Se señala que la ACP pretende convocar a la licitación del servicio de remolcadores en las entradas de mar, en el Caribe y en el Pacífico, para su manejo por empresas extranjeras. Iván de la Guardia, secretario general de la Unión, afirmó que dispone de evidencias de ese plan, que “atenta contra los intereses del pueblo panameño y su histórica lucha por la soberanía”.

Subrayó que el Sindicato dispone de información que confirma que desde 2013, altos funcionarios de la ACP “se encuentran involucrados en un plan para limitar nuestro legítimo ejercicio de libertad sindical” en la vía acuática. Sin embargo, la ACP ha negado esos señalamientos.

En 2014, el sindicato denunció los intentos de la ACP de desarticular el sindicato, con el presunto objetivo de reducir las protestas en contra de la privatización de servicios. Esa denuncia fue rechazada por autoridades canaleras. Las negociaciones entre ese sindicato y la ACP están actualmente estancadas.

Los conflictos que se avecinan en torno al Canal de Panamá constituyen alarmas que debe tomar en cuenta el gobierno. Para ello debe reorientar su política de convertir la vía en un negocio para unos pocos especuladores y garantizar su integración a un plan de desarrollo nacional.

Fuente: <http://www.alainet.org/>

## **VENEZUELA**

### **UNASUR SUSPENDE REUNIÓN DE CANCELLERES SOBRE VENEZUELA**

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) informó este martes la suspensión de la reunión extraordinaria de cancilleres pautada para el 23 de junio, cuyo propósito era conocer las gestiones de la comisión de expresidentes que promueven el diálogo en Venezuela.

Pese a que no se realizará la reunión de cancilleres, la Unasur mantiene la invitación para esa fecha a los expresidentes para hablar sobre el proceso de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana.

La suspensión de la reunión, que se realizaría en Ecuador, se hizo a petición del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.

No obstante, el organismo de integración mantuvo la invitación para esa fecha a los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España), Martín Torrijó (Panamá) y Leonel Fernández (República Dominicana), para hablar sobre los avances de los diálogos entre el Gobierno y la oposición venezolana.

### **Comunicado sobre la Reunión Extraordinaria de Cancilleres de UNASUR**

El Secretario General, ex presidente, Ernesto Samper Pizano, después de realizar las consultas con los distintos países y atendiendo la solicitud de algunos de ellos para que se aplazara la reunión de Cancilleres convocada para conocer las gestiones de la comisión de expresidentes que promueven el diálogo en Venezuela y en aras de preservar la unidad regional, ha pedido en el día de hoy a la PPT de UNASUR la suspensión de dicha reunión, solicitud que fue aceptada.

Dado el interés y la actualidad de los esfuerzos que vienen realizando la Comisión de ex presidentes a nombre de UNASUR, para explorar y definir los caminos conducentes a un diálogo entre el Gobierno y la oposición, UNASUR mantiene la invitación a los exmandatarios para visitar UNASUR el día jueves 23 de junio, convenir los siguientes pasos en esta tarea e informar a la opinión pública.

**Telesur 21 junio 2016**

### **CARTA DE PEPE MUJICA A LUIS ALMAGRO, SECRETARIO DE LA OEA**

*El secretario de la OEA Luis Almagro convocó el 31 de mayo una reunión del Consejo Permanente para invocar la Carta Democrática contra Venezuela y expulsarla de la OEA.*

*El 17 de junio, Pepe Mujica declara su desacuerdo con las posiciones de Almagro, y publica la carta que le había dirigido.*

“Entiendo que sin decírmelo, me dijiste ‘adiós’.

Cuando te pedí que no concurrieras a la frontera convulsionada de Venezuela y Colombia, no era capricho ni menos no querer ver la realidad. La preocupación mía no es como nos ven o entienden los medios de prensa o los políticos. No, la línea de preocupación es cómo incidir algo a favor de la gran mayoría de los venezolanos. Es la misma actitud asumida en el conflicto Estados Unidos-Cuba, o con la paz de Colombia. Lo central no es cómo nos ven sino ser útil o no a la mayoría de la gente corriente. Creo que en algún momento habrá que servir de puente para que Venezuela toda pueda manejar con solvencia su autodeterminación y no deberíamos divorciarnos de ese rumbo. Todos sabemos que Venezuela es reserva petrolera para los próximos 300 años. Allí radica su riqueza y su desgracia, porque Estados Unidos es adicto al petróleo y sus intereses presionan y cómo. También esto hizo posible la deformación sociológica de acostumbrarse a vivir de la renta petrolera y terminar importando hasta lo elemental, el grueso de la comida.

La revolución bolivariana no pudo escapar con voluntarismo de esa realidad aunque derramó recursos y reservas a favor de los eternos postergados. En mucho fueron años a favor de la equidad social. No se logró revertir la dependencia del petróleo y de las importaciones de alimentos, y con la caída de precios, padece hoy un cúmulo de tensiones que hasta enturbian la democracia.

Venezuela necesita paz interior, es decir convivencia en primer término, y deberíamos trabajar para ello. Necesita no reducir la idea de socialismo a estatización y precisa coyuntura de NEP para su economía y sus desequilibrios monetarios. Esto parece imprescindible para viabilizar reparto, estabilidad y democracia.

Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces, la presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad.

Repito: la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias pero esto implica clima que lo posibilite.

Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real.

Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido.”

“Pepe”